

Ref: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
HÁBEAS CORPUS
Accionante: ISAÍAS RINCÓN MILLÁN en su condición de Agente Oficioso
de DANIEL RINCÓN VARGAS
Accionado: SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA BOYACÁ
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE RAMIRÍQUÍ BOYACÁ
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE RAMIRÍQUÍ BOYACÁ
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL DIAMANTE DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Girardot, Cund., Cuatro (4) de Marzo de dos mil Veintidós (2022)

ASUNTO POR DECIDIR

Se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el accionante en contra de la providencia que denegó el amparo constitucional de HÁBEAS CORPUS.

De acuerdo con dicha providencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jerusalén Cundinamarca el 26 de febrero del presente año, la acción constitucional se torna improcedente por haberse comprobado que la persona privada en cuyo favor se demanda el amparo constitucional, se encuentra privada de la libertad de manera legal por cuanto contra ella se dictó sentencia de condena intramuros por tiempo que aún no alcanza el quantum de la pena, ni el tiempo necesario para acceder a los subrogados penales correspondientes.

CONSIDERACIONES

Al respecto vale la pena citar un fragmento jurisprudencial que presenta el tema de la procedencia de la acción constitucional del HÁBEAS CORPUS, de la siguiente manera:

“...3. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:

3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000), la

captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007) y la captura administrativa (sentencia C-24 del 27 de enero de 1994), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Carta y, por ello, de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.

3.2. *Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley. En tal supuesto, la acción de hábeas corpus tiene por objeto que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado (por ejemplo: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.) o bien, b) adopte la decisión correspondiente al caso (definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hipótesis posibles)...” (C.S.J. Proceso 31376. M.P. JOEGE LUÍS QUINTERO MILANÉS Auto 2 de marzo de 2009).*

C A S O C O N C R E T O

De acuerdo con la documentación y providencias judiciales aportadas al presente caso, se encuentra establecido que desde el inicio de las diligencias penales del hoy condenado, su privación de la libertad ha respondido a las decisiones judiciales adoptadas en cada etapa procesal, desde su captura el 19 de agosto de 2020 y la subsiguiente diligencia de legalización de la misma en la que se allanó a los cargos de la Fiscalía, hasta la sentencia de primera instancia que lo condenó a 44 meses de prisión, de los cuales ha descontado físicamente 18 meses y 24 días, razón por la que no procedería la libertad inmediata por pena cumplida; ni la libertad condicional, ya que no se dan los presupuestos del artículo 64 del C.P., puesto que las 3/5 partes de la pena equivalen a 26 meses y 12 días de prisión.

Tampoco procede el amparo de HABEAS CORPUS frente a la calificada por el accionante, demora en la decisión del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia dictada el 18 de noviembre de 2020, pues bien sabido es que el juez constitucional no puede inmiscuirse en el trámite ordinario de los jueces naturales de conocimiento a quienes les está asignado el mismo, pues la acción de estudio solo representa un control externo al proceso cuando se considere la privación ilegal de la libertad o su prolongación igualmente ilegal.

Tras el anterior somero pero suficiente y claro análisis puede concluirse acertadamente, que el funcionario judicial que denegó el amparo, lo hizo con base en las pruebas puestas a su disposición que establecen la privación legal de la libertad del condenado, aunque se encuentre pendiente la resolución del recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia, ya que el mismo fue concedido en el efecto suspensivo, que no suspende el cumplimiento de la providencia condenatoria, pues que el artículo 177 del C.P.P., al fijar el efecto en que se concede la apelación, determinó únicamente la suspensión de la competencia del a quo.

DECISIÓN

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la Ley,

RESUELVE

Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2022 dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jerusalén Cundinamarca, con la que se denegó el amparo de HABEAS CORPUS solicitado por el agente oficioso ISAIAS RINCÓN MILLÁN en favor del condenado DANIEL RINCÓN VARGAS.

NOTIFÍQUESE

El Juez,


FERNANDO MORALES CUESTA